
EDITORIAL

La concertación social

Estamos de acuerdo con Antón Saracíbar, secretario confederal de organización de la UGT, cuando escribe que "la concertación es la mejor política posible para desarrollar el concepto de solidaridad y la mejor alternativa para evitar la sociedad dual, la división y la quiebra del movimiento obrero". Ambas ideas, solidaridad y sociedad igualitaria, son esenciales desde el punto de vista de la justicia y de la armonía social y, además, de plena actualidad. Nuestra economía, en efecto, en los actuales momentos de euforia, está desarrollando una sociedad española cada vez más dual y dividida: prosperidad creciente para los empresarios y trabajadores de todos los niveles con puestos estables de trabajo, marginación progresiva para los parados (sobre todo jóvenes y mujeres), jubilados, agricultores.

Por otra parte, concordamos con Manuel Zaguirre, secretario general de USO, cuando afirma que "pese a su carácter inconcreto, las propuestas de Felipe González (de julio pasado) convocando a un esfuerzo de solidaridad con los más desfavorecidos y a un esfuerzo por desarrollar la competitividad y despegue de nuestra economía nos parecen los enfoques más serios de lo que debería ser la próxima concertación social". Efectivamente, el presidente del Gobierno había propuesto a patronal y sindicatos un acuerdo por tres años que girará sobre dos ejes: solidaridad con los más castigados por la crisis y garantías de competitividad frente a los retos tecnológicos y a la integración en la Europa comunitaria.

Lo primero, la solidaridad, es un camino abierto específicamente a la acción sindical. Lo segundo, la competitividad, es una promesa de apertura a las reivindicaciones empresariales. ¿Estarán a la altura sindicatos y CEOE? La pregunta viene a cuento porque se acusa, no sin razón, a los sindicatos, de preocuparse mucho más, a la hora de la verdad, de los intereses profesionales de los trabajadores con empleo estable, que de la calamidad de aquellos que han perdido o no han estrenado todavía un puesto de trabajo. Es pertinente también porque no puede sacrificarse todo al crecimiento máximo y por tiempo indefinido de los excedentes empresariales. Es preciso lograr una solución de compromiso entre solidaridad —universal— y beneficio.

Editorial

Hay un punto en que empresarios y Gobierno han avanzado en estos últimos cuatro meses: el de aceptar para 1988 subidas salariales, en torno al 4 por 100, por encima del porcentaje de inflación esperada para ese mismo período, un 3 por 100. Este tema fue el principal responsable de la falta de concertación durante 1987. Gobierno y patronal proponían subidas salariales en torno a la tasa de inflación esperada: un 5 por 100. De hecho, sin concertación, la subida media de los sueldos y salarios en 1987 ha sido del orden del 6,7 por 100. Y, a pesar de todo, se están pudiendo cumplir perfectamente, al menos hasta octubre cuando esto escribimos, los objetivos previstos de inflación. Más aún; ese cierto desbordamiento de los salarios sobre los toques de patronal y Gobierno está contribuyendo a sostener a buen ritmo la demanda interna, que se demuestra como uno de los principales motores de la recuperación económica y también —recuperación moderada— del empleo. Estimamos que éste es un punto que hay tener muy en cuenta en el actual proceso de concertación. También creemos conviene recordar que, según la opinión unánime de los economistas y la voz misma de la experiencia, no tiene por qué ser inflacionista una subida de los salarios a ritmos paralelos a los de la productividad del trabajo; esto es así aunque tales tasas sean superiores a las de la inflación objetivo.

UGT y CC.OO. proponen, frente a un acuerdo global tipo AES, un proceso permanente de negociación con el Gobierno sobre temas puntuales. Es, sin duda, una forma de pedir su injerto duradero en el poder político formal. No nos parece mal —estamos en tiempos del neocorporativismo— pero creemos que entonces deberían aceptar también la contrapartida: corresponsabilizarse en los riesgos de la programación y gestión de la política oficial.